

BOLETIN DE NOTICIAS

COMITÉ MONS. OSCAR ROMERO DE MADRID

Argumosa, 1-6º-B 28012-Madrid. Tfno.: 91.539.87.59 Email:cmromero@nodo50.org

El Comité Mons. Oscar Romero de Madrid no se responsabiliza necesariamente de las opiniones presentadas en este Boletín. Señalamos las fuentes de donde han sido extraídas.
En caso de que no desee seguir recibiendo nuestro Boletín, por favor, comuníquenoslo por medio de un correo electrónico a la dirección más arriba señalada.

BOLETÍN NÚMERO 272		FECHA: 23 de Octubre de 2017
SUMARIO		
PAÍS	CONTENIDO	NºPÁG.
AMÉRICA LATINA	PROCESOS CONSTITUYENTES DEL SIGLO XXI EN AMÉRICA LATINA	2
	MÁS TROPAS ESTADOUNIDENSES EN AMÉRICA LATINA: ¿SEÑALES DE UNA INVASIÓN ANUNCIADA?	3
ARGENTINA	DECENAS DE MILES DE PERSONAS MARCHARON A PLAZA DE MAYO POR SANTIAGO MALDONADO	6
COLOMBIA	SANTOS VUELVE A LAS SUYAS: LA MASACRE DE CAMPESINOS EN TUMACO	8
	MARCHA PATRIÓTICA CONVOCA A UN PARO INDEFINIDO PARA EXIGIR CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE PAZ	10
GUATEMALA	SE REANUDA EL JUICIO POR GENOCIDIO CONTRA EL DICTADOR EFRAÍN RÍOS MONTT	11
HAITÍ	LA MINUSTAH SE FUE PERO LA OCUPACIÓN PERMANECE	12
HONDURAS	“DEMOCRACIA”: SIN DERECHOS HUMANOS	13
MÉXICO	LA “AYUDA” EN OAXACA: TARJETAS SIN SALDO, DONACIONES QUE NO APARECEN Y POLÍTICOS QUE COBRAN SIN SER DAMNIFICADOS	14
	LA CANDIDATA DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y EL EZLN	15
NICARAGUA	PARA LOS NICARAGÜENSES IMPORTA MÁS LA ECONOMÍA QUE LA POLÍTICA	18
PANAMÁ	ESTAMOS EN LA ÚLTIMA FASE DE DESARROLLO CAPITALISTA	19
PUERTO RICO	DECLARACIÓN DEL MOVIMIENTO INDEPENDENTISTA NACIONAL HOSTOSIANO (MINH), SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE PUERTO RICO	20
VENEZUELA	INFORME ELECCIONES REGIONALES VENEZUELA 2017	22
	OBSERVADORES INTERNACIONALES CALIFICARON REGIONALES COMO UN PROCESO “EXITOSO”	24
	VERGONZOSA CENSURA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESPAÑOLES SOBRE VENEZUELA.	24
	COMUNICADO OFICIAL REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	26

AMÉRICA LATINA

PROCESOS CONSTITUYENTES DEL SIGLO XXI EN AMÉRICA LATINA

Las ciencias jurídicas y políticas occidentales enseñan que una Asamblea Constituyente es un acto (reunión) de ciudadanos “notables” para organizar un Estado y consensuar las reglas básicas de convivencia social (Constitución Política). Así nacieron las bicentenarias repúblicas criollas latinoamericanas, a inicios del siglo XIX.

Lo absurdo fue que los “notables” redactores de dichas constituciones políticas (a espaldas de las grandes mayorías), establecieron “artículos pétreos” (inmodificables), especialmente en relación al cómo y qué debería de modificarse en dichas leyes madres.

De esta manera, casi todas las constituciones políticas latinoamericanas son rígidas al poseer “candados” (para evitar su fácil modificación) cuyas “llaves” las resguardan los ciudadanos plenos (los ricos).

A inicios del presente siglo, pueblos insubordinados como Venezuela, Ecuador y Bolivia, al ver que los ricos se banquetearon las riquezas de los pueblos, incluso utilizando estructuras del Estado corrupto y sus leyes, decidieron romper dichos “candados” constitucionales, y mediante el ejercicio de la soberanía popular desde las calles, emprendieron inéditos caminos de procesos constituyentes.

Los ricos y sus capataces (analistas, intelectuales, periodistas), al ver que dichos procesos constituyentes caminaban en serio, comenzaron a recriminar a los insubordinados acusándolos que dichos procesos eran: “caminos suicidas e irresponsables”, “que eran rompimiento del orden constitucional”, “que eran antidemocráticos y llevarían a los países al desastre total”. Pero, el sistema neoliberal ya había hecho demasiados desastres socioeconómicos en dichos países, y los pueblos no estaban dispuestos a aguantar.

Ecuador, luego de la traición del Presidente Gutiérrez, llevó a la Presidencia a Rafael Correa, quien mediante una consulta popular (2007) rompió el “candado” constitucional, y encaminó al pueblo ecuatoriano por el camino constituyente.

Venezuela, empobrecida y saqueada, tuvo que llevar a la Presidencia al legendario Hugo Chávez, quien mediante consulta popular (1999) también convocó al proceso constituyente al pueblo venezolano.

En el caso boliviano, en 2005, el pueblo eligió como Presidente a Evo Morales, con una mayoría absoluta de congresistas en ambas cámaras, y así se pudo aprobar/promulgar la Ley de Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (2006).

A inicios del presente siglo, estos tres países, junto a Paraguay, Perú y Colombia, estaban económicamente hundidos en la miseria. Políticamente gangrenados por la corrupción. Con convulsiones sociales generalizadas o crecientes. En Ecuador y Bolivia, los presidentes electos no duraban más de 6 meses en sus cargos, por la convulsión social. Una inestabilidad política insostenible.

Bolivia, Ecuador y Venezuela optaron por el camino de procesos constituyentes ampliados e incluyentes (originarios, dignos y soberanos, los autodenominaron). Nacionalizaron sus empresas y bienes privatizados (en la larga noche neoliberal). Redactaron y aprobaron nuevas constituciones políticas con la participación de todos los pueblos. Así se zafaron del sistema neoliberal y su democracia representativa corrupta, y emprendieron los caminos postneoliberales, con democracias participativas y comunitarias.

En Perú, Colombia y Uruguay, no asumieron ese reto. Aún puede más el miedo a los patrones, y el espejismo suicida neoliberal.

¿Qué lograron aquellos países con los procesos constituyentes?

En lo económico. Con los excedentes económicos obtenidos con la recuperación (nacionalización) de los bienes y servicios privatizados (como hidrocarburos), lograron sacar de las condiciones de empobrecimiento a cerca de diez millones de latinoamericanos en conjunto, e incorporarlos a la emergente clase media. Universalizaron los sistemas de servicios básicos y seguros de salud, etc.

Sanearon sus sistemas tributarios, y estabilizaron sus economías. El Estado, como actor y rector de la economía, redistribuye las ganancias económicas mediante inversión social (en cantidades jamás conocidas). Ecuador y Bolivia son catalogados fenómenos económicos en la región por su crecimiento económico.

Al límite que organismo como la ONU, BM o el propio FMI reconocen que en lo que va de este siglo, estos tres países (junto a Brasil, con Lula) evitaron que el promedio global de la pobreza en América Latina empeorase.

En lo social. Ecuador, Bolivia o Venezuela ya no son más pueblos en proceso de desintegración social sangrienta (como ocurría a principio del siglo). Se evitó una confrontación sangrienta entre ricos y empobrecidos.

Los niños, en lugar de trabajar como esclavos en las fincas, van a la escuela con alimentos e implementos asegurados. Los estados invierten en la educación casi el promedio del 6% del PBI.

Los agricultores gozan de seguro agrícola. Las mujeres, niños y ancianos gozan de seguro de salud universal.

Bolivia, es el único país en la región donde los trabajadores reciben doble aguinaldo.

En lo político. El Estado logró construir hegemonía territorial y social (lo que no había logrado casi en dos siglos).

Países como Bolivia y Ecuador dejaron de ser los campeones mundiales en la corrupción pública.

Caminan con sus propias piernas, sin depender de la cooperación internacional, o del intervencionismo extranjero. Están reinventando el sueño de la soberanía y dignidad. Dejaron de ser estados fallidos.

Bolivia y Venezuela son los dos únicos países en el mundo occidental donde está legislado y se practica la revocatoria de mandato para quitar o ratificar gobernantes (presidentes) que se corrompen o pierden legitimidad. Son países donde más consultas vinculantes y convocatorias a urnas se realizan en la región.

Pero, el mayor legado de estos nuevos procesos constituyentes, para estos tres países, fue la superación (individual y colectiva) de la situación del hundimiento psicológico, y del sin sentido identitario que habitaba a bolivianos, ecuatorianos y venezolanos hasta no hace más de un década atrás.

Ahora, estos pueblos, en y desde su condición de plurinacionalidad, van construyendo la identidad de una comunidad política intercultural imaginada. Falta mucho aún por hacer, pero, no cabe duda que hay grandes avances, y que el mismo proceso constituyente plurinacional fue y es una terapia para la tan anhelada sanación (inicio) de las profundas taras coloniales.

(Fuente: Ollantay Itzamná/ Resumen Latinoamericano)

MÁS TROPAS ESTADOUNIDENSES EN AMÉRICA LATINA: ¿SEÑALES DE UNA INVASIÓN ANUNCIADA?

Un nuevo ejercicio militar en la Amazonia da luz sobre el resurgimiento de la presencia estadounidense en Latinoamérica.

El ejército estadounidense acentuará su presencia militar en la Amazonia latinoamericana. Bajo la iniciativa Amazon Log 2017 del gobierno golpista de Michel Temer en Brasil, la Operación 'América Unida' juntará a los ejércitos de Estados Unidos, Brasil, Perú y Colombia del 6 al 13 de noviembre del 2017 en la ciudad tri-fronteriza de Tabatinga. Este ejercicio es una señal de un sustancial incremento de militarización extranjera en la región.

La iniciativa es liderada por el Comando de Logística del Ejército Brasileño y está inspirada en el ejercicio logístico militar realizado por la Organización del Tratado Atlántico del Norte (OTAN) en Hungría en 2015, que tuvo un despliegue de aproximadamente 1700 militares. Para esta versión latinoamericana, los objetivos, según la página oficial del Ejército brasileño, son crear una base logística multinacional temporal para realizar operaciones de control de migración ilegal, asistencia humanitaria, operaciones de paz, acciones contra narcotráfico y cuidados ambientales.

Sin embargo, como lo señaló el diario brasileño Gauchazh, enseñar a un ejército extranjero a combatir en territorio nacional debería ser considerado "alta traición". Aunque para el Ministerio de Defensa brasileño esto no es traición sino una oportunidad que permitirá unir a los ejércitos de ambos países.

El problema de este ejercicio es la magnitud y apertura que se ha dado a los Estados Unidos en ingresar a la selva latinoamericana. Por lo que uno de los riesgos es que la base 'temporal' se convierta en permanente como sucedió en Hungría, tras los ejercicios de la OTAN. Aunque las autoridades brasileñas lo niegan.

Este interés de los Estados Unidos en la región debe ser medido con la historia del imperio del norte. El altruismo, cuidado a la naturaleza o lucha contra el narcotráfico estandarizados para su presencia en la región hacen eco a inserciones en otras partes del mundo, especialmente Medio Oriente, y la realidad es que ahí estos no son ni fueron sus objetivos. Detrás de toda acción militar norteamericana siempre se encuentra el fin de apoderarse de recursos para lograr sus intereses nacionales.

En el caso de América Latina, la abundancia de recursos naturales da razón a la presencia norteamericana. Según el Banco Mundial, la región cumple un rol global en la problemática del cambio climático ya que posee "las reservas de agua dulce más grandes del mundo".

Una noticia 'agridulce' para los latinoamericanos ya que para varios analistas, inclusive el ex candidato presidencial demócrata Bernie Sanders, "las guerras del futuro serán por el agua". Entre los diez países con mayores reservas se encuentran Brasil (1ro), Colombia (6to) y Perú (8vo), coincidentemente los tres involucrados en la Operación 'América Unida'.

En la Oficina de Evaluación Neta (Office of Net Assessment) del Departamento de Defensa cuyo objetivo es analizar el futuro del ejército y sus amenazas. Andrew Marshall, ex director (1973-20015) comisionó en 2004 un reporte confidencial a Peter Schwartz, consejero de la CIA y ex Director de Planificación del grupo Royal Dutch/Shell; y Doug Randall, del Global Business Network.

En las conclusiones finales, los autores argumentan que el cambio climático y la escasez de agua son una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y razones para futuros conflictos militares. Trece años más tarde de dicho reporte, Estados Unidos se prepara para asentar una base más en orilla del Amazonas.

Pero el agua no es el único interés de este país en la región. Telma Luzzani, periodista argentina, explica en su libro 'Territorios Vigilados', que "en el Amazonas se encuentra el 95% de las reservas de niobio, fundamental para el acero de las naves espaciales y de los misiles intercontinentales, y el 96% de las reservas de titanio y tungsteno, utilizados en la industria aeronáutica espacial y militar, además de ser rica en petróleo, gas, uranio, oro y diamantes".

Es por esto que el próximo ejercicio militar es solo una pieza más dentro de un patrón creciente de militarización y amenazas regionales. Solo en lo que va del 2017 se han realizado otros dos ejercicios militares en el Pacífico y el Caribe: Teamwork South con Chile y [Tradewinds](#) frente a las costas de Venezuela con 18 países y más de 2500 militares.

La libertad de estas acciones militares demuestra un resurgimiento de la presencia estadounidense en la región, la cual se había reducido durante los distintos mandados de gobernantes progresistas neodesarrollistas en la América Latina. Aunque el asentamiento de bases en América Latina y el Caribe ha pasado por diferentes etapas desde la posguerra es a finales del siglo XX que toma su rumbo actual.

En 1999, como parte del acuerdo Torrijos-Carter, la base militar Howard en Panamá que albergaba al Comando del Sur, rama del ejército encargada en operaciones para la región, se desmanteló. Esto llevó al que Departamento de Defensa de Estados Unidos replantee su estrategia de defensa y política exterior. Bajo el estandarte del Plan Colombia, la 'Guerra contra la Droga' y operaciones humanitarias, se aplicó dos modelos de bases militares en Latinoamérica.

La primera, Main Operating Base (MOB), una base militar con infraestructura y acuerdos aprobados por los gobiernos: Guantánamo Cuba, Soto Cano en Honduras y varias en Puerto Rico. A pesar de que estas siguen activas, el modelo fue desechado por que genera rechazo por parte de los habitantes nacionales y un costo elevado en infraestructura y logística.

Es por esto que se aplicó un segundo modelo llamado Forward Operating Locations (FOL) o Bases de Operaciones de Avanzada, que se caracterizan por mantener poco personal militar pero la capacidad de "escalar" su presencia si fuera necesario. Las cuatro reconocidas y oficiales en la región, iniciaron sus actividades en 1999 y son: Aruba, Curazao, El Salvador, y Manta (que no renovó el contrato en 2009).

Como lo explica Robert Kaplan, ex asesor del Pentágono (2009-2011), "a menudo, el papel clave en la gestión de un FOL es desempeñado por un contratista privado. Él alquila las instalaciones en la base del ejército del país anfitrión, y luego cobra una tarifa a los pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que transitan por la base. Oficialmente es un negocio privado, lo que le gusta al país anfitrión porque puede afirmar que no está realmente trabajando con el ejército estadounidense. Por supuesto, nadie, incluidos los medios locales, cree esto. Pero el mismo hecho de que una relación con las fuerzas armadas de los Estados Unidos sea indirecta en lugar de directa facilita las tensiones".

Pero el nombre nuevo tampoco convenció a los locales, quienes comenzaron a sospechar y rechazar estas intervenciones en territorio. Por lo que la denominación FOL cambió a Cooperative Security Location (CLS), Puesto de Seguridad Cooperativa. Sin embargo, son lo mismo y en la región las bases siguen aumentando.

En la actualidad y ante la falta de cifras oficiales se conocen 75 bases aproximadamente, algunas son MOBs, FOL/CLS, y otras llevan nombres como Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) en el caso peruano. Los países que encabezan la lista Panamá (12), Puerto Rico (12), Colombia (9) y Perú (8).

A su vez, Colombia suscribió un acuerdo de cooperación en 2016 con la OTAN para el intercambio de información, estrategias y protocolos del ejército colombiano con los miembros de esta organización, entre los que se encuentra los Estados Unidos. Mauricio Macri, presidente argentino, anunció que volverá a permitir la instalación de bases militares permanentes en Argentina, una en la triple frontera con Paraguay y Brasil y otra en Tierra del Fuego en Ushuaia. En Brasil, el gobierno de Temer incrementó un 36% al presupuesto militar, meses después de aprobarse el PEC 55 que congeló el presupuesto de salud y educación pública durante 20 años.

Estas acciones legitiman la presencia militar extranjera una vez a niveles gubernamentales. Además con estos nuevos enfoques en Defensa, se afianzará las alianzas militares con Estados Unidos, algo que abrirá la puerta para una nueva fase de adoctrinamiento en las fuerzas armadas latinoamericanas, donde Brasil cumple un rol crítico.

Según Héctor Luis Saint Pierre, coordinador de Seguridad Internacional, Defensa y Estrategia de la Asociación Brasileña de Relaciones Internacionales, "hay un respeto en Sudamérica por la escuela militar brasileña. Entonces, Brasil es un socio estratégico para la formación doctrinaria de los

militares del continente. Si Estados Unidos tiene buena relación con la armada brasileña, es más fácil difundir su mensaje entre los militares de la región”.

Un escalofriante recuerdo que remonta al funcionamiento de la Escuela de las Américas, institución de adoctrinamiento militar e ideológico de los Estados Unidos, encargada de formar a escuadrones de tortura y muerte en toda Latinoamérica durante los años 70, 80 y 90. Volver a modelos de defensa de corte colonial solo representa un retroceso y peligro para el proceso de integración regional y la paz.

Inclusive iniciativas como el Consejo de Defensa Suramericano (CDS), creado por UNASUR en 2008 para encargarse en implementar políticas en materia de cooperación militar, acciones humanitarias y operaciones de paz, industria y tecnología de la defensa; será observador oficial de la Operación América Unida. “De ese modo, se legitiman los espacios en los que participa el Pentágono y se diluyen los espacios propios de la región sudamericana”, comenta Raúl Zibechi, periodista uruguayo.

Con la presencia estadounidense socavando las soberanías nacionales, apoyados por el retorno de líderes de ‘derecha’ y la deslegitimación sistémica de los proyectos progresistas de la región, la idea de Latinoamérica unida sin imposiciones imperialistas se convierte nuevamente en un sueño. De forma alarmante la región se sigue llenando de bases estratégicas de los Estados Unidos para controlar recursos, personas y operaciones militares, y entonces ¿si eso no es colonialismo qué es?

(Fuente: Martín Pastor. ALAI)

ARGENTINA

DECENAS DE MILES DE PERSONAS MARCHARON A PLAZA DE MAYO POR SANTIAGO MALDONADO

Miles de personas marcharon por el centro porteño, en la primera gran demostración tras confirmarse la muerte de Santiago. Los organismos de derechos humanos convocantes, entre ellos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, estuvieron acompañados de decenas de organizaciones y partidos de izquierda, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y otros nucleamientos del campo popular. También se acercaron numerosas personas autoconvocadas por la necesidad de expresar su repudio al gobierno de Macri, quien durante 80 días intentó -a través de pistas falsas- negar la realidad, que la Gendarmería secuestró a Santiago Maldonado. En el acto se denunció la responsabilidad de Macri, de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, su jefe de gabinete, Pablo Nocetti, el Ministro de Justicia, Germán Garavano, el Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, en el encubrimiento del crimen de Maldonado. Cada vez que desde el micrófono se los nombraba, la multitud prorrumpía en grito de “Fuera, fuera”. O entonaba: “como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”. Por momentos, miles de gargantas volvieron a entonar el “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, que se hizo popular en 2001, para repudiar a los políticos burgueses.

Esta gigantesca manifestación se realizó en plena veda electoral y a pocas horas de los comicios que elegirán legisladores. A pesar de que el Gobierno por medio de varios de sus funcionarios, entre ellos el ministro de Justicia, Garavano, intentaron disuadir de que la concentración se lleve a cabo, fueron miles los que respondieron para expresar su total condena a un gobierno que se cree impune como para desentenderse de un crimen de lesa humanidad.

Un documento contundente

“Para seguir reclamando justicia, para abrazar a su familia, para abrazarlo a él y para demostrar que el pedido de justicia de este pueblo no se calla ni ante las campañas de prensa del gobierno, ni con las campañas de intimidación de las fuerzas represivas”. Con estas palabras comenzó la

lectura de un documento durante una concentración en Plaza de Mayo que el Encuentro Memoria Verdad y Justicia convocó después de que se conociera la noticia de que el cuerpo encontrado este lunes en el Río Chubut era el de Santiago Maldonado.

“Seguimos denunciando la responsabilidad de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el Ministro de Justicia Germán Garavano, el Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj y otros funcionarios del gobierno en el encubrimiento del hecho, el ocultamiento de pruebas y el hostigamiento a los testigos y la familia”, reza el documento leído esta tarde durante la manifestación.

Documento del ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

Esta concentración a Plaza de Mayo, convocada por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, es un acto necesario para todos los que reclamábamos la aparición con vida de Santiago Maldonado desde el 1 de agosto. Para seguir reclamando justicia, para abrazar a su familia, para abrazarlo a él y para demostrar que el pedido de justicia de este pueblo no se calla ni ante las campañas de prensa del gobierno, ni con las campañas de intimidación de las fuerzas represivas

Después de 81 días, la familia Maldonado pudo reconocer el cuerpo de Santiago. Ayer, la verdad que gritamos desde el primer día empezó a declararse oficialmente, a pesar de todos los engaños y todas las campañas de prensa.

Todos los pasos dolorosos hacia la verdad que se dieron esta semana, fueron producto de la denuncia constante y sin pausa que este movimiento de miles y miles dio junto a la familia de Santiago Maldonado.

Dijimos que Santiago estaba el 1 de agosto en el Pu Lof, la Ministra Bulrich y todos los voceros de este gobierno lo negaron y está probado que Santiago estuvo en el Pu Lof.

Dijimos que Santiago fue víctima de la Gendarmería que, bajo las ordenes de Noceti entró ilegalmente a las tierras de la Comunidad Mapuche. El gobierno negó una y otra vez la participación de Noceti y está probado que Noceti se reunió ese día y los anteriores con los Jefes de los dos Destacamentos de Gendarmería que participaron en la represión del 1 de agosto.

Dijimos que Santiago fue desaparecido por la Gendarmería y ellos decían que estaba en Chile, o en Entre Ríos. Hoy repetimos: Santiago fue desaparecido por el Estado. El gobierno de Macri y sus funcionarios han mentido una y otra vez para ocultar las consecuencias de su política represiva.

La represión en la que fue secuestrado Santiago forma parte de la represión del pueblo mapuche que llevan adelante el gobierno de Chubut y el gobierno nacional para entregar sus tierras a los Benetton, los Lewis, al fracking y las mineras. Ese 1 de agosto Santiago desapareció por estar en el corte de la ruta 40 en el que se exigía la libertad de Facundo Jones Huala.

Al igual que Santiago nos sumamos al pedido por la libertad a Facundo Jones Huala. Los medios de prensa afines al Gobierno Nacional siguen en su campaña de demonización del pueblo mapuche y pretenden hacer responsable a la comunidad del Pu Lof de este crimen cometido por el Estado.

Y hasta en el día de hoy, cuando la autopsia del cuerpo de Santiago no está terminada, utilizando las declaraciones prematuras y funcionales del juez Llerar el gobierno a través de los medios intenta frenar la movilización por justicia, así como ayer gracias al juez Otranto inventaban supuestos paraderos de Santiago para salvar a la Gendarmería.

Compañeros y compañeras, estamos en esta Plaza porque sabemos que nuestra lucha por justicia recién empieza.

Gracias a la movilización en las calles encontramos a Santiago. La justicia sólo podremos asegurarla con más movilización.

(Fuente: Resumen Latinoamericano)

COLOMBIA

SANTOS VUELVE A LAS SUYAS: LA MASACRE DE CAMPESINOS EN TUMACO

Mientras el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, así como el ministerio de Defensa, aseguran que los hechos ocurridos en Tumaco, fue una “respuesta” al uso de cilindros bomba contra los uniformados, la comunidad desmiente la versión y acusa directamente a las fuerzas militares y policiales por la muerte de seis campesinos, entre ellos un menor de edad, y más de 30 personas heridas.

Santos responsabilizó este viernes a “bandas delictivas” de haber iniciado el conflicto armado que provocó la masacre de Tumaco este jueves en el que resultaron asesinados al menos nueve campesinos, a pesar de que la comunidad de Tumaco identificó como responsables a funcionarios del Ejército de Colombia y la Policía Nacional.

Según Santos la localidad de Tumaco es una zona “que desde hace muchos años ha sido un corredor de narcotráfico y fuente importante de materia prima del mismo”, razón por la cual, en esa región se encuentran “bandas delictivas” que “han sido identificadas” y alegó que esas “bandas criminales están cohesionando a los campesinos para que se opongan a la sustitución voluntaria de los campos”.

Sin embargo, Santos no hizo referencia a que, desde el 28 de septiembre, miles de colombianos se encuentran en protesta pacífica en Tumaco, exigiendo se detenga el asesinato contra los campesinos y el desalojo forzado de las tierras que trabajan -como único medio de sustento-, así como el cumplimiento de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc).

“Hemos identificado a los alias El Guacho y El David (el primero de estos presunto responsable de los disparos contra la fuerza pública) quienes se convirtieron en objetivos de alto valor para la fuerza pública colombiana y por la que actualmente se ofrecen 150 millones de pesos por cualquier información que contribuya a la de captura de los individuos”, dijo.

La ONU se pronunció a través de un comunicado con un informe sobre las actividades que realiza para apoyar a la región y las posibles causas de lo sucedido. “El análisis de la Oficina señala que las muertes de ayer se dan en un contexto de problemas estructurales de derechos humanos, sumados a la falta de implementación del Acuerdo de Paz, y a la urgente y necesaria solidaridad y acción de todos los sectores de la sociedad civil”.

Además, incluyó una lista de situaciones que viven los corregimientos del Alto Mira y Frontera, en Tumaco, como la “presencia limitada del Estado, altos niveles de pobreza, falta de implementación integral del Acuerdo de Paz, aparición de disidencias de las Farc e índices de violencia a niveles endémicos”.

La Fiscalía informó en su último comunicado que hasta el momento van seis muertos, entre ellos un menor de edad, y más de 30 personas heridas. Además, anunció que ya empezaron las investigaciones correspondientes para averiguar qué fue lo que sucedió. A estos esfuerzos se sumaron la Procuraduría, la ONU y la Defensoría del Pueblo.

Repudio generalizado

Distintas organizaciones sociales, así como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Farc, exigieron a la justicia colombiana que se esclarezcan los hechos suscitados de manera inmediata sobre la masacre contra la población campesina de Tumaco.

Rodrigo Londoño, presidente de la Farc, indicó que los medios de comunicación colombianos tergiversan la información sobre los hechos y buscan ocultar la verdad. “La verdad: Campesinos en Tumaco hacen resistencia a erradicación forzada de cultivos de uso lícito. La erradicación forzada acompañada de la bala, son medidas insensatas y criminales”, agregó Londoño advirtiendo a Santos.

A su vez el ELN, que actualmente se encuentra en los diálogos de paz con el gobierno colombiano y mantiene un cese al fuego desde el 1 de octubre, manifestó su condena a la masacre y exigieron la intervención con urgencia de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, así como el apoyo internacional ante la gravedad de los hechos.

Por su parte, representantes de la Marcha Patriótica y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana -Coccam- reiteraron la denuncia sobre la responsabilidad de la Policía y el Ejército en la masacre de 8 campesinos. Niegan posible responsabilidad de disidencias de la FARC y exigen una misión de verificación de alto nivel.

Según indicó Luz Perly Córdoba, la masacre perpetrada por fuerzas del Estado en el municipio de Tumaco ocurrió en medio del desarrollo de una acción cívica de cerco humanitario, cuyo fin era impedir la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. Ante el lamentable hecho, Córdoba afirmó que es incomprensible la doble moral del Gobierno: “El Estado aplica la represión contra los cultivadores mientras sus funcionarios dicen en los medios que el problema de los cultivos solo se resuelve atacando las causas estructurales que llevaron a humildes campesinos a recurrir a este medio para subsistir”.

Para Córdoba, la masacre de Tumaco es el hecho más grave pero la represión en la erradicación forzada no se ha suspendido: “Hechos de represión y violencia en la erradicación se presentan en todo el país. Los campesinos han manifestado su voluntad de hacerlo voluntariamente, han firmado acuerdos con el programa de sustitución y al día siguiente vienen a erradicar a la fuerza”.

Por su parte, el vocero nacional de la Marcha Patriótica David Flórez indicó que las comunidades cocaleras de Tumaco manifestaron, desde el 28 de septiembre, el incumplimiento del Gobierno al Plan Nacional Integral de Sustitución -PNIS-, parte del punto 4 del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto. “Lo que ocurrió en Tumaco fue una masacre, estamos seguros de que el reporte de Medicina Legal confirmará que todos los asesinados fueron alcanzados por balas de las armas oficiales del Ejército”, enfatizó Flórez.

“No hubo ningún combate lo que hubo fue una masacre”, dice la Asociación de Juntas de Acción comunal de los ríos Nulpe y Mataje. Otras organizaciones aseguran que no hay pruebas del uso de cilindros, y piden con urgencia una Misión de Verificación de los Hechos y urgen al estado colombiano que investigue y sancione a los responsables.

Desde hace 15 días campesinos protestan pacíficamente en rechazo a la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y exigen el cumplimiento de los acuerdos sobre sustitución voluntaria. A las 9:30 de la mañana de este jueves, un cerco de más de mil campesinos se acercó a miembros de la fuerza pública que erradicaban manualmente los cultivos. De pronto, los integrantes de la fuerza armada amenazaron y dispararon armas de fuego contra la multitud dejando a nueve personas muertas y 18 heridos.

¿Algo ha cambiado?

Eduardo Sogamoso, de la organización popular Trochando Sin Fronteras, recordó que en Colombia la gran mayoría de los habitantes no tiene condiciones mínimas de bienestar, mientras unas cuantas familias acumulan capital y sirven de puente para que las multinacionales se apropien

de los recursos naturales y de riqueza social. "Tal es la causa del conflicto social, político y armado que se vive en este país desde hace más de 53 años", indicó.

Señaló que el proceso de paz iniciado con la dejación de armas por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), genera dudas a la población, tal vez porque el acceso a la información es muy poco o recibe información manipulada de acuerdo a los intereses de los que ostentan el poder. "En esa negociación ha salido del juego un actor armado, al cesar sus acciones y entregar sus armas, pero la violencia en la mayor parte del país continúa", indicó.

Sogamoso sostiene que el paramilitarismo, entendido como un mecanismo de guerra sucia del Estado de sectores del poder económico, se ha hecho evidente en los casos recientemente ventilados, en los cuales altos funcionarios públicos, tanto civiles como militares y de policía, se han visto envueltos en investigaciones por sus nexos con estructuras paramilitares que suman acciones violentas contra la población civil para el control territorial en algunas regiones de Colombia...

De acuerdo a un informe presentado en el mes de enero por INDEPAZ, se evidenció la presencia de estructuras paramilitares en 344 municipios de 31 departamentos del país. Mientras, medidas como la reciente reforma tributaria y la ley de tierras, entre otros actos legislativos promovidos por el Estado, sumado a las necesidades básicas insatisfechas, generan en el país una sensación de desconfianza en su dinámica social y política, junto al incumplimiento por parte del gobierno de los compromisos hechos con comunidades y movimientos sociales del país, tales como la titulación de tierras, la entrega de subsidios para los pequeños productores y la superación de la crisis de la salud.

Mientras al mundo se le vende la idea del fin del conflicto y la Paz, las comunidades deben salir a las calles a exigir cosas tan elementales como acueducto, alcantarillado, escuelas, colegios, hospitales o carreteras, mientras la corrupción, el asesinato sistemático y la judicialización de líderes sociales, hablan de las verdaderas intenciones de Paz del sistema.

Esa Paz de la cual hablan el gobierno, los ricos y las empresas multinacionales, le es ajena a la sociedad en general. En ese orden de ideas, ¿qué ha cambiado con la dejación de armas por parte de las FARC? Y si no cambiado nada, ¿Cómo logrará el pueblo colombiano obtener mejores condiciones de vida?, pregunta Sogamoso.

Fuente: Camilo Rengifo Marín en <https://www.alainet.org/>

MARCHA PATRIÓTICA CONVOCA A UN PARO INDEFINIDO PARA EXIGIR CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE PAZ

Un paro nacional indefinido fue acordado por organizaciones sociales que hacen parte de Marcha Patriótica para exigir el cumplimiento pleno del acuerdo de paz.

Tras una reunión este 18 de octubre en Bogotá, voceros de 12 departamentos y representantes de organizaciones agrarias nacionales acordaron movilizarse la próxima semana ante las reiteradas obstrucciones a lo pactado en La Habana.

También definieron redactar un pliego de peticiones para radicar ante la Presidencia de la República con el fin de que se reactive la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) y se aborden compromisos sin cumplir por parte de las autoridades.

En particular, preocupa el incumplimiento a los acuerdos colectivos de sustitución concertada, el estancamiento del Programa Nacional de Sustitución Integral de Cultivos de Uso Ilícito y la obstrucción a varios proyectos de ley para poner en marcha lo pactado en la mesa de La Habana. Además, el escaso o nulo avance en temas como las garantías de seguridad y la apertura democrática.

Este paro nacional indefinido tendrá lugar la semana del 23 de octubre y a él se han adherido organizaciones como Anzorc, la Coccam y Fensuagro. También comunidades agrarias de al menos 11 departamentos del país.

Oficina de Prensa Marcha Patriótica

GUATEMALA

SE REANUDA EL JUICIO POR GENOCIDIO CONTRA EL DICTADOR EFRAÍN RÍOS MONTT

Un tribunal reinicia este viernes un juicio especial por genocidio contra el exjefe de Estado Efraín Ríos Montt (1982-1983), luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó un amparo a favor de los querellantes.

La CC, máxima instancia judicial del país, validó la resolución de una sala de apelaciones que en mayo de 2016 ordenó separar el juicio a puerta cerrada de Ríos Montt, quien padece demencia, y el proceso público por el mismo delito contra el exjefe de inteligencia militar José Rodríguez, dijo el abogado Héctor Reyes, defensor de las víctimas.

“Derivado de esta situación es que fuimos convocados para la continuación de debate” para el viernes por parte del Tribunal B de Mayor Riesgo, señaló el jurista del querellante Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh).

Juicios separados

Reyes señaló que el juicio especial contra el Ríos Montt, de 91 años, será recommenzado la mañana del viernes a puerta cerrada en un proceso que de encontrarlo culpable no conlleva prisión sino una medida sustitutiva.

Por la tarde se reiniciará el juicio oral y público contra el septuagenario Rodríguez, agregó.

El abogado prevé complicaciones para el desarrollo de los debates porque se esperaba que otro tribunal se hiciera cargo del juicio público contra Rodríguez.

La separación de los juicios permitirá que el proceso contra Ríos Montt se realice a puerta cerrada sin la presencia del acusado por la demencia diagnosticada y serios problemas de salud, mientras que el de Rodríguez será abierto y público. Los querellantes temían que al hacerlos en conjunto pudieran ser anulados posteriormente.

Señalamientos

Ríos Montt está acusado de la matanza de 1 mil 771 indígenas mayas-ixiles en el departamento de Quiché durante su dictadura (1982-83), considerado el período más sangriento de la guerra civil guatemalteca (1960-1996), que dejó unos 200 mil muertos o desaparecidos, según la ONU.

De acuerdo con la acusación, Ríos Montt orquestó una política de exterminio contra el pueblo indígena, al que acusaba de colaborar con las guerrillas izquierdistas durante la guerra civil.

(Fuente: Nodal)

HAITÍ

LA MINUSTAH SE FUE PERO LA OCUPACIÓN PERMANECE

La diplomacia imperialista siempre se ha basado en mentiras, chantajes, amenazas y provocaciones. Invariablemente es el mismo escenario, raído de tanto uso, que en la actualidad se repite con la idea engañosa de una desocupación ilusoria de Haití con el fin de seducir a la opinión nacional e internacional.

Esta situación de politiquería maquiavélica se desenvuelve con ligereza al ocultarse detrás de cierta ceremonia de clausura de las actividades de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH), salida el jueves 5 de octubre por una puerta, teniendo mucho cuidado de desplegar por otra puerta el mismo arsenal represivo y mortífero anclado en una nueva prueba de fuerza de la policía internacional de la Misión de las Naciones Unidas para apoyar la justicia en Haití (MINUJUSTH) que entrará en vigor el 16 de octubre en la más amarga indiferencia.

Sea cual fuere la salida de este nuevo episodio, se hace cada vez más claro que las motivaciones de las fuerzas de la ONU, ya sean militares o de policía, no hacen más que contribuir a la degradación de manera que la situación económica y social no cambia ni un milímetro. Entonces nadie es engañado. ¿MINUJUSTH y MINUSTAH? Blanco gorro y gorro blanco. ¡Que nadie se engañe! El reemplazo de la MINUSTAH por parte de la MINUJUSTH no es en modo alguno el triunfo de la democracia, ni siquiera una solución supuestamente ideal. Es, por el contrario, solo una trampa clásica de la oligarquía financiera internacional y su sistema anacrónico en las Naciones Unidas que nos tiende en alto la píldora.

De hecho, la evolución de esta situación, también degradada, naturalmente suscita un amplio y profundo descontento popular; ya que nos muestra una vez más que ningún fin será puesto amigablemente a esta despiadada dominación de la cual es víctima el valiente pueblo haitiano. Siempre es el mismo insulto el que se perpetúa para sofocar la lucha libertadora del pueblo y romper su heroica resistencia.

Esto va mucho más allá de los pretextos cuando, al momento que las masas populares están denunciando el gobierno a través de su Caravana del Cambio y su ley de finanzas antipueblo 2017-2018, el Grupo Core -compuesto por los embajadores de Brasil, Canadá, España, los Estados Unidos de América, Francia, los representantes de la MINUSTAH, de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea-, ha venido para darle un fuerte apretón de manos a modo de consolidar la posición de sus valets defendiendo los intereses de los capitalistas.

Esta acción se inscribe en un marco más amplio en el cual el cinismo se agrega a la barbarie del crimen. Para ellos se trata de endosar de una vez por todas, como algo irreversible, su hegemonía que no tiene otra finalidad que el fortalecimiento del sistema de saqueo, explotación, dominación, dependencia y sometimiento.

Lo que debe entenderse es que la burguesía, en una alianza de clase con la alta esfera dirigente de ciertos partidos políticos, por no decir la mayoría de ellos, no ve ningún obstáculo para la dominación imperial ni mucho menos la ocupación. Por el contrario, prefieren acomodarse para ganarse privilegios y poderes en detrimento de las aspiraciones populares.

Las masas populares que reclaman el derecho a una vida libre y la igualdad social deben salir ellas mismas de esta paradoja para luchar contra el invasor. Este último, un agresor por naturaleza, sin duda empacó sus maletas, pero su modo de andar sigue siendo básicamente el mismo. ¡Sus tentáculos permanecen intactos y continúa mostrando sus dientes! Es la manifestación de sus objetivos tácticos para destruir mejor la organización del pueblo. No es casual que el jefe del servicio Jovenel Moïse, como señal de lealtad, declaró en la llamada ceremonia de partida de la MINUSTAH: "Como Jefe de Estado, voy a dedicar todo mi energía a la estabilización del país. El programa del gobierno se enfoca en particular en la realización de esta tarea necesaria y noble". En verdad, tales prácticas y discursos no hacen más que recordarnos tristemente de los períodos

coloniales de nuestra historia. Está claro que la MINUSTAH se fue; ¡pero las Naciones Unidas permanecen a fin de perseguir sus objetivos criminales!

(Fuente: Resumen Latinoamericano)

HONDURAS

“DEMOCRACIA”: SIN DERECHOS HUMANOS

“Cuando se intimida, tortura o se producen tratos crueles inhumanos y degradantes a un individuo y si esa persona es defensor o defensora de los derechos humanos y del ambiente, estamos ante un acto colectivo de violación de los derechos humanos, componente importante de una guerra psicológica de un Estado que tiene una política criminal punitiva y persecutoria que se pone en mayor evidencia a pocos días de las elecciones presidenciales. Se trata de un estado policial, militar en cuyo rostro enmascarado están ausentes: la justicia social, el respeto de los derechos ambientales, humanos y la defensa de la dignidad histórica de los pueblos”.

El 15 de octubre 2017, cuando el Lic. Psicólogo Mario Zavala Presidente de la Junta Directiva del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), previo al abordaje de su vuelo con dirección hacia Europa fue intimidado por un supuesto agente contra el narcotráfico quien lo retuvo para investigación: *“aduciendo que era sospechoso de tráfico y que iba a registrar todo. Después de llevarme aparte procedió a hacerme preguntas para intimidarme con voz fuerte e insistir que amigos tenía, a que se debía mi viaje. Procedió a registrar mi maleta y a decirme que sacara todo el dinero. Saqué lo que llevaba y me insistió que todo el dinero. Cuando logre identificar su placa, el agente de nombre José Luis, suavizo su voz y dijo que era algo de rutina”*, señala Mario Zavala.

Y agrega: *Con voz imperativa me dijo: “¡Con quienes te vas a reunir!”, a lo cual respondí: “Con los eurodiputados, con organizaciones de derechos humanos en Ginebra, Bruselas y Holanda”. Después de hacer el control migratorio me dijo que tenía la capacidad de no hacerme abordar el vuelo, porque era sospechoso. Cuando le dije: Que llevaba años luchando en derechos humanos, sin embargo me trataba como un delincuente. Luego me dijo: “Es algo que pasa en cualquier aeropuerto”. Finalmente logré abordar el vuelo”*.

Hace tres semanas, el Director Ejecutivo del CPTRT, el que suscribe esta denuncia, recibió mensajes intimidatorios de amenazas de ser asesinado a lo cual se suma la tortura que sufrieron defensores y defensoras de los derechos humanos solidarios con las víctimas de la criminalización de la protesta estudiantil por las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Presentamos esta denuncia en plano nacional e internacional y estamos sumamente preocupados por lo que pueda pasar a Mario Zavala o a cualquiera de los defensores o defensoras de los derechos humanos y del ambiente porque se vive en Honduras con una tasa impunidad mayor del 90%

Demandamos la solidaridad nacional e internacional de las organizaciones de derechos humanos y defensa del ambiente con Mario Zavala y el personal del CPTRT y exigimos del gobierno de la República de Honduras se respeten los derechos humanos

Tegucigalpa, 16 de octubre 2017

Fuente: Juan Almendares en <https://www.alainet.org/>

MÉXICO

LA “AYUDA” EN OAXACA: TARJETAS SIN SALDO, DONACIONES QUE NO APARECEN Y POLÍTICOS QUE COBRAN SIN SER DAMNIFICADOS

El presidente Enrique Peña Nieto regresa de visita a esta entidad en medio de marchas, bloqueos carreteros y cuestionamientos a los programas de reconstrucción por los sismos, debido a que las tarjetas bancarias que entregó Sedatu no tienen dinero, y las de materiales son retenidas por Bansefi, esto sin contar que existen políticos que cobraron sin ser damnificados.

A la par, trabajadores de la Secretaría de Salud denunciaron las pésimas condiciones en la que están laborando desde el jueves 7 septiembre, fecha en que el Hospital Regional de Juchitán “Macedonio Benítez Fuentes” quedó totalmente destruido.

En su quinta visita al Istmo de Tehuantepec tras los sismos de septiembre, y ninguna a la Sierra Juárez, Mixe o Mixteca, zonas que también resultaron afectadas, Peña Nieto ahora acudirá al municipio de Santo Domingo Ingenio, donde revisará la entrega de tarjetas y apoyos para la reparación y construcción de viviendas.

Un grupo de damnificados de ciudad Ixtepec realizó una marcha para exigir al gobierno federal y estatal recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) para reconstruir sus viviendas.

En tanto que integrantes de comunidades indígenas del Istmo realizaron dos bloqueos carreteros, uno en inmediaciones de El Ajal y el cruce a Boca del Monte para exigir una mesa de diálogo con la Sedatu, con el fin de “resolver cientos de irregularidades en torno a los apoyos para la reparación de viviendas dañadas por los sismos de septiembre.

Además, demandaron la entrega del programa de empleo temporal a los afectados, programas de recuperación económica a las productoras de totopo y pequeños comerciantes, asimismo, exigieron la transparencia en el ejercicio del recurso público.

Antes, los trabajadores de del Hospital General “Macedonio Benítez Fuentes” cuestionaron duramente al secretario de Salud federal, José Narro Robles, y al estatal, Celestino Alonso Álvarez, por mantenerlos en un lugar inadecuado, primero expuestos al sol, luego a las lluvias, el lodazal y ahora al viento y polvo.

Y es que las autoridades federales y estatales tomaron la decisión de instalarlos en el campo deportivo del Canal 33 por el simple hecho de ser más visible a los ojos de la población y tendría mayor impacto político.

A pesar de que los trabajadores argumentaron que no era el lugar adecuado, debido a que no se cuenta con drenaje, luz eléctrica especial para equipos, pavimentación, ni sanitarios para trabajadores y pacientes, ahí los instalaron y ahora padecen los vientos que en esta temporada alcanzan los 130 y 150 kilómetros por hora.

De igual forma, cuestionaron a la presidenta municipal perredista Gloria Sánchez López, quien “jamás ha volteado a ver las condiciones en que laboran”.

La delegada sindical del hospital, Yolanda Sánchez Ulloa, manifestó que “el tiempo nos ha dado la razón a los trabajadores de que no era el lugar adecuado. Primero el sol candente; después llegaron las lluvias que inundaron las carpas donde se hospitalizan los pacientes, el terreno se convierte en lodazal y charcos de agua, y ahora el viento”.

Hizo hincapié en que se han mantenido trabajado gracias a la sociedad civil que ha donado casas de campaña para protegerlos de las lluvias.

A pesar de esas malas condiciones, dijo, las unidades móviles han otorgado más de 3 mil consultas y 300 atenciones de traumatología, donde a diario nacen de 8 a 10 niños.

También han realizado más de 20 cirugías no obstétricas, atendido a baleados porque la violencia no para en la ciudad, entonces, “seguimos trabajando igual o más que antes del terremoto”.

Finalmente, lanzaron varias preguntas al presidente Peña, al gobernador Alejandro Murat y a las autoridades de Salud: “¿Acaso no merecemos un mejor lugar a pesar de que el hospital de Juchitán tiene bajo su responsabilidad a más de 130 mil habitantes?”

“¿Acaso no importa al secretario de salud y a la presidenta de Juchitán la salud de los juchitecos?”

“¿Acaso son más sensibles las asociaciones sociales que, con sus donaciones de medicamentos, nos permiten subsistir y quieren seguir donando cuartos prefabricados porque sienten suyo el dolor de los trabajadores?”.

Y finalmente remató: “¿En dónde quedaron las donaciones millonarias hechas por los empresarios mexicanos y otros países como para que no alcance para que nos habiliten consultorios, quirófanos, cuartos de especialización y cocinas?”.

A estos casos hay que agregarles los escándalos de la expresidenta y exdiputada del PRI, Adelina Rasgado, quien cobró los apoyos de tres viviendas sin ser damnificada; o del delegado de la Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas, Saulo Chávez, que favoreció a su mamá.

O el caso de la presidenta municipal de Juchitán, Gloria Sánchez, que destinó más de un millón de pesos para apoyar a parte de su cabildo como “damnificados”, o del presidente municipal de San Miguel Chimalapas, Fernando Miguel Contreras, que embodegó las despensas.

El problema más reciente que han denunciado en Juchitán, Ixtaltepec e Ixhuatán es que damnificados por los sismos a los que entregaron tarjetas electrónicas para cobrar recursos del Fonden para mano de obra y materiales carecen de saldos.

En otros casos como en Ixhuatán, en los sobres que está repartiendo el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) deben venir dos tarjetas, una por mano de obra y otra por materiales.

Sin embargo, al momento de entregar el sobre con el contrato, los funcionarios están retirando la tarjeta de materiales sin dar mayor explicación, aprovechándose de que la mayoría de la población no sabe leer ni escribir.

Fuente: <http://www.proceso.com.mx/>

LA CANDIDATA DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y EL EZLN

Finalmente fueron 86 las solicitudes ante el Instituto Nacional Electoral de aspirantes a ser candidatos sin partido a la Presidencia de la República, de las cuales 40 se han declarado procedentes y 38 más están pendientes de resolución por tener que responder algún requerimiento de la institución. Pero sólo una de todas esas precandidaturas tiene claramente un sentido social y colectivo más allá de intereses personales o de pequeños grupos.

Se trata, desde luego, de la propuesta del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, María de Jesús Patricio Martínez, conocida familiarmente como Marichuy, una indígena nahua originaria del estado de Jalisco, dedicada a la medicina tradicional y que ha tenido una larga participación en el movimiento indígena del país.

La propuesta política del CNI y EZLN, organizados ahora como Consejo de Gobierno Indígena (ya que no se integró la totalidad de los organismos que conforman el CNI), presenta varias aristas de interés dignas de comentarse. La más evidente, desde luego, es la decisión de estos organismos y otros colectivos que se les están adhiriendo de abandonar su posición hasta hace muy poco antielectoral y aventurarse en este terreno para ellos nuevo, dominado por los aparatos y burocracias de los grandes partidos. Aunque hace ya más de un año que el movimiento indígena nacional anunció su intención de consultar y promover este tipo de participación, no deja de

sorprender que haya logrado en breve tiempo el consenso para lanzar la candidatura de una mujer indígena a la Presidencia.

No olvidemos que, en particular el EZLN, no ha renunciado nunca a ser un movimiento armado, aunque no se hayan usado sus armas desde hace más de dos décadas. La incógnita es si esta nueva etapa y esta nueva empresa será de algún modo un proceso de institucionalización, equivalente a los que se vivieron en El Salvador o Colombia, pero en este caso sin un proceso de diálogo entre la guerrilla y el gobierno. Lo que es claro es que sí ha habido una larga tregua entre ambas partes y que hoy el movimiento armado no tiene ya perspectivas como tal. Pero la presencia del EZ y el hecho de que Marichuy esté iniciando su proselitismo precisamente en Chiapas entre sus bases de apoyo, puede ser un rasgo muy determinante, para bien o para mal, en la incipiente campaña. Si los electores interpretan el proceso como la integración del movimiento neozapatista a la política, en un sentido incluso más amplio que el electoral, es posible que se acreciente el número de adeptos de la candidatura indígena. Pero también el respaldo del Ejército Zapatista a ésta puede restarle apoyos entre otros sectores de la sociedad nacional que rechazan decididamente la vía armada.

El primer reto que tendrá que sortear esta candidatura independiente es reunir las más de 866 mil firmas necesarias para obtener el registro y aparecer en las boletas de 2018. No es una tarea fácil, aunque el contar con una base social como lo es el movimiento indígena organizado le dará viabilidad a esa descomunal tarea que muy pocos —no más de dos o tres— de los hoy registrados alcanzarán a cumplir.

Pero no es el único obstáculo a superar. Ya colocado en un escenario electoral y con una precandidatura visible, este movimiento táctico de las organizaciones indígenas sólo podrá ser exitoso si se traduce en un caudal de suficiente de sufragios en las urnas. Pero esa meta se entrapa con un discurso ambiguo donde aún predomina la desconfianza en los procesos electorales y donde la propia vocera-candidata afirma que no va en pos del voto ni del poder. La falta de convicción y el recelo de los militantes con respecto de los medios ahora elegidos pueden impedir que se cumplan los propósitos de la campaña misma. Si los actores no tienen convicción en el proceso, ¿cómo convencer a círculos más amplios de ciudadanos de las bondades de sufragar por este naciente movimiento? Hasta ahora la ambigüedad se expresa en que algunos de sus voceros (por ejemplo el Colectivo Utopía, de Michoacán) hablan de “una nueva forma de gobernar”, desde luego basada en principios proclamados hace tiempo por el neozapatismo, como el “mandar obedeciendo”, en tanto que otros (Guillermo Almeyra) y la candidata misma niegan expresamente que el propósito de la campaña sea alcanzar el gobierno. Esto último implica que no importan los votos sino usar la campaña para la difusión y organización, algo semejante a lo que vimos hace unas décadas en las dos postulaciones de Rosario Ibarra de Piedra.

Desde un inicio la posición representada por Marichuy y quienes la respaldan se ha presentado como anticapitalista. Bien, pero ello requiere trascender el nivel de la mera denuncia y las frases declarativas y traducirse en propuestas viables que conformen, si no un programa de gobierno, sí una plataforma electoral sólida y amplia que entronque y se engarce con los intereses de sectores y grupos diversos de la sociedad, más allá del mundo indígena. Hasta hoy esa plataforma parece no existir y tendrá que construirse sobre la marcha, en el andar de la campaña y en la suma de nuevos apoyos. Si se quiere lograr el éxito será necesario un discurso creíble, susceptible de diferenciarse del de políticos del sistema y de los pretendidamente independientes.

Hacer campaña entre los sectores indígenas y a los ya politizados contra el régimen y el sistema político vigente, sobre todo los organizados, no implicará mayores dificultades, dado que es posible con recursos propios; pero alcanzar con el mensaje del CGI al resto de la sociedad implicaría un caudal de recursos humanos y económicos de los que quizá este nuevo movimiento no disponga, más cuando se ha renunciado explícitamente a recibir las prerrogativas oficiales a las que se tendría derecho si se obtiene el registro para la candidata. Tampoco es suficiente con renunciar a esas prerrogativas para demostrar que la candidatura sea políticamente superior a las de los aparatos partidarios. Esa superioridad debería demostrarse justamente en ámbito político, el del

debate, la confrontación de ideas y propuestas hacia la sociedad, y no sólo en el terreno de la moral.

En otras palabras, el dilema para una candidatura como la de Marichuy Patricia es el de disputar el poder político formal a los grupos oligárquicos que hoy lo controlan, o usar la campaña de 2018 tan sólo como un recurso para la organización o reorganización y la actualización de los objetivos del movimiento indígena, es decir, para propósitos internos de éste. En Bolivia, Evo Morales se decidió desde el principio por lo primero y conformó un movimiento-partido con objetivos claramente políticos; pero ello se daba después de una etapa de intensas movilizaciones y luchas por el agua, la tierra y contra la represión a los campesinos cocaleros. Algo semejante ocurrió con el movimiento indígena de Ecuador, aun cuando ahí el abanderado fue un mestizo, Rafael Correa. En México, empero, el movimiento de los pueblos originarios se encuentra en una etapa de repliegue, como ha ocurrido en los últimos años con el propio EZLN.

La peor opción para este naciente movimiento electoral y para su representante jalisciense será enfocar su discurso contra el candidato de centro-izquierda López Obrador, y no contra los factores reales de poder, económico y político, que han llevado a la crisis del país. Es una de las tentaciones en que se puede incurrir para tratar de legitimar su presencia como una opción diferente, pero que mantendría en la superficialidad una campaña digna de mejores destinos, dada la legitimidad de las demandas indígenas y de otros grupos sociales que se pueden sumar a éstas con su propio programa reivindicativo. En contraparte, no faltarían los partidarios del tabasqueño que acusen al CGI y a su candidata de servir a los propósitos del sistema de impedir el avance de aquél; el escenario de la división y el enfrentamiento entre las izquierdas (entre las cuales, por supuesto, no se cuenta ya el PRD) es el más conveniente para el PRI, el PAN y las candidaturas de utilería presentadas como “independientes”.

Algunos voceros del CNI y CGI han dicho que el propósito de su incursión electoral no es disputar votos a López Obrador y a Morena, sino suscitar la participación de otros sectores, entre ellos los hasta hoy abstencionistas. Puede ser, pero ello le implica un nuevo dilema: de llegar a la elección constitucional, elevar la participación electoral y reducir la abstención, sobre todo si termina imponiéndose un candidato de la derecha, puede suponer darle más legitimidad al sistema político en su conjunto, al que por otra parte se rechaza. Ello no representa que la candidatura de Marichuy Patricia sea injustificada, pero sí que tiene que tomar en cuenta su peculiar ubicación dentro de la arena político-electoral y a qué tipo de electorado debe dirigirse.

Finalmente, es claro que una candidatura como la de la señora Patricia Martínez como mujer, indígena y sin una formación universitaria, será enfrentada no sólo por los poderes fácticos, sino también la crítica despiadada de lo peor de la sociedad civil mexicana: el machismo, la misoginia, el clasismo y el racismo, siempre latentes pero que desde ya afloran cuando los sectores más oprimidos deciden movilizarse ante la explotación y la injusticia social. Serán necesarias acciones concretas y una propuesta social adecuada para neutralizar esas expresiones que tendrían que estar por completo superadas en el México del siglo XXI. Ya después de la jornada electoral de 2018, si Marichuy llega a las urnas, podremos hacer el balance de esta experiencia de campaña y de participación electoral, que puede ser un posicionamiento nuevo y una nueva etapa del movimiento indígena y su articulación con la llamada sociedad nacional, o un fracaso táctico que incluso lo haga retroceder.

Fuente: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/>

NICARAGUA

PARA LOS NICARAGÜENSES IMPORTA MÁS LA ECONOMÍA QUE LA POLÍTICA

Al menos nueve de cada diez nicaragüenses consideran que los principales problemas que enfrenta el país están ligados a lo económico y a lo social, y no a lo político, según revela la última encuesta de opinión pública, realizada en todo el país por la firma M&R Consultores, cuyos resultados se presentaron ayer en la Universidad Americana (UAM).

La firma encuestó a 1,720 personas de ambos sexos, mayores de 16 años. De estos, el 72.4% estima que su mayor preocupación es económica y la relacionan al desempleo, la pobreza y al incremento en los precios de los servicios públicos.

A un 23.2% de los nicaragüenses encuestados les preocupa lo social, lo que consideran está ligado a la delincuencia, a la corrupción, la falta de infraestructura adecuada, a la crisis de valores y a la falta de ayuda internacional.

Solamente un 3.8% cree que la situación actual que enfrenta el país se debe a problemas políticos y un 0.6% opina que a ninguna de las razones anteriores.

Te interesa: ¿Hablar de política? No, gracias

“Los datos sobre la situación política, que muchas veces son los que más se critican en estas encuestas, indican una realidad: que la gente obviamente no le está dando a la política la importancia que tal vez otros sectores quisieran darle, seguramente porque la presión por la sobrevivencia o la necesidad de un trabajo sigue ocupando la principal atención de la gente”, considera Ernesto Medina, rector de la UAM.

No obstante, Medina cree que el aspecto político o de “proteger la institucionalidad del país no lo debemos descuidar, porque sin estabilidad y sin respeto a la institucionalidad será muy difícil que esta tendencia positiva que el país ha tenido en los últimos años en lo económico se pueda mantener”.

OTRAS PREOCUPACIONES

La idea de los encuestados de que lo social es un problema que enfrenta el país experimentó un incremento de más del 13% en relación con el sondeo realizado a finales de diciembre pasado, al pasar de 10.78% a 23.2%, un dato que según Juan Sebastián Chamorro, presidente de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo (Funides), debe llamar la atención de todos los sectores.

“Ha aumentado bastante la percepción de la población de que hay una mayor delincuencia y corrupción, entonces vemos que el tema económico siempre es el número uno, pero no queremos dejar de llamar la atención de que el tema social viene creciendo”, indicó Chamorro.

Durante la presentación de los resultados de la encuesta, el gerente de M&R Consultores, Raúl Obregón, expresó que el 92.6% por ciento de los nicaragüenses propone el diálogo como herramienta para resolver las diferentes problemáticas del país.

El 78.1% de los entrevistados aprueba el diálogo entre el Gobierno y el sector privado y un 84.4% sugiere el diálogo entre partidos de oposición y el Gobierno.

Por otra parte, un 54.2% apoya demandas de cambios al sistema electoral y el 64.1 aprueba la promoción de reformas a la Ley Electoral, que impulsa la agenda del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

“Es interesante que tanto los sectores independientes, como los simpatizantes del FSLN y la oposición, demandan que se atiendan los planteamientos por revisar el sistema electoral, para que después de las elecciones todo mundo quede tranquilo y las acepte”, indicó Obregón.

Empresa privada, vital para desarrollar el país

El 71.1% de los nicaragüenses considera que la empresa privada es indispensable para el desarrollo del país, y solo un 12.9% está en desacuerdo, según la encuesta de M&R Consultores, realizada entre el 19 de junio y el 2 de julio de este año en todo el país.

El estudio también reveló que el grado de acuerdo de los encuestados al planteamiento del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), de fomentar el empleo formal, se elevó al 73.4% según datos del sondeo, experimentando un incremento de casi 10 puntos porcentuales en relación con la encuesta de marzo del presente año cuando era de 63.7%.

“El empleo formal es un tema que destaca, hay expectativas positivas de la población para el próximo año, pero en ese sentido la encuesta le dice al Estado que tiene que ser un Estado facilitador que promueva inversión y le dice al sector privado que tiene que ser ese motor que busque cómo poner la inversión y allí es donde está el principal reto: en tener empleos más formales y en tener más acceso a los productos de la canasta básica”, expresó José Adán Aguerri, presidente del Cosep.

Fuente: <http://www.elnuevodiario.com.ni/>

PANAMÁ

ESTAMOS EN LA ÚLTIMA FASE DE DESARROLLO CAPITALISTA

Enfrentamos una realidad social cambiante. Hace unos pocas décadas teníamos un economía basada en la agricultura y servicios que se prestaban a la ruta de tránsito. Las fortunas se hacían conquistando el poder político y recogiendo las migajas que repartía la posición geográfica del país. Una masa de trabajadores lograba sobrevivir de un trabajo informal en los arrabales de las ciudades de Panamá y Colón así como en las áreas rurales. Teníamos altos índices de analfabetismo y de enfermedades transmisibles. Carecíamos de un Estado capaz de definir políticas nacionales. Un sistema político inestable y subordinado a la potencia hegemónica mundial de turno.

El siglo XXI presenta un país bastante diferente al descrito más arriba. El poder político está en manos de la clase capitalista financiera y quienes dominan la ruta de tránsito (el entorno del Canal de Panamá). Todavía persiste una masa de trabajadores informales en las áreas marginales de la ciudad de Panamá. Coexiste con una clase obrera y capas medias insertas en el mercado de consumo. Los índices de analfabetismo han disminuido a casi cero y se han erradicado las enfermedades transmisibles. Los niveles educativos se estancaron y los servicios de salud colapsaron para los trabajadores informales que representan a más del 50 por ciento de la población.

Aún cuando se logró que EEUU evacuara las bases militares que rodeaban el Canal de Panamá, que levantaran las ‘estacas’ coloniales de la Zona del Canal y entregaran la vía acuática en 1999, no se cuenta con un Estado capaz de definir políticas nacionales. El sistema político sigue siendo inestable y dependiente de la potencia hegemónica.

En el siglo XX Panamá pasó por tres fases de desarrollo capitalista. El primero fue la continuación de la versión del capitalismo mercantil dependiente. Una inversión capitalista industrial muy fuerte (Ferrocarril y Canal) que reproducía formas sociales de explotación capitalista de ‘enclave’. La misma fue sustituida – a partir de la segunda guerra mundial - por el capitalismo industrial dependiente con fuertes inversiones en tecnología norteamericana que generó una clase obrera y una juventud combativas. A partir de la invasión norteamericana de 1989, el consenso de Washington y las políticas neoliberales desmontaron la industria y gran parte de la agro-industria. El cambio produjo una sucesión de gobiernos conservadores (1990-2017) que desarticuló a las organizaciones populares y logró desactivar la combatividad de la juventud.

La burguesía industrial panameña que surgió y prosperó entre 1935 y 1980 abandonó el sector manufacturero e invirtió sus capitales en el sector del capital financiero. La banca panameña sustituyó la industria como la 'locomotora' de la economía capitalista. Las reformas a los tratados del Canal con EEUU en 1936 y 1955 le dieron un fuerte impulso a la industria. Se suponía que el Tratado del Canal Torrijos Carter (1977) – sin incluir el de Neutralidad – le daría el impulso que necesitaba al sector industrial para ser competitivo. La consigna de Torrijos de darle el “uso más colectivo” a los ingresos del Canal fue reemplazado dos veces después de su muerte violenta en 1981. La primera vez por el general Noriega, quien entre 1983 y 1987, intentó transformar la ex Zona del Canal en un centro para la formación de un Ejército. La segunda fue después de la invasión militar norteamericana, cuando Washington convirtió “el mercado como la herramienta fundamental para determinar la asignación de recursos” del Canal.

En la actualidad, la Autoridad del Canal de Panamá recauda anualmente US\$3 mil millones que no pueden invertirse en proyectos de desarrollo nacional. En los próximos 5 años serán más de US\$15 mil millones. Cerca de US\$10 mil millones irán directamente a las arcas fiscales del gobierno. Están al servicio de las grandes empresas corporativas extranjeras que invierten en proyectos que van desde facilidades portuarias, ferroviarias, mineras, logísticas e inmobiliarias.

A falta de un proyecto de desarrollo nacional, el país no tiene visión de futuro. Ni siquiera puede aspirar a estudiar las ofertas que llegan al país. Empresas de China Popular lanzaron la idea de construir un ferrocarril 'bala' entre la ciudad de Panamá y la frontera con Costa Rica. Los gobernantes, a falta de visión, sólo atinaron a darles la bienvenida.

Es posible que estamos en la tercera y última fase de desarrollo capitalista. Urge que sectores amplios de la sociedad en forma organizada asuman la responsabilidad de tomar la dirección del país en el marco de un plan de desarrollo nacional.

Fuente: Marco A. Gandásegui, hijo en <https://www.alainet.org/>

PUERTO RICO

DECLARACIÓN DEL MOVIMIENTO INDEPENDENTISTA NACIONAL HOSTOSIANO (MINH), SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE PUERTO RICO

El huracán María arrancó el verdor de nuestros bosques y árboles, pero provocó algo peor: dejó al desnudo la incapacidad, insuficiencias y las enormes limitaciones del gobierno de Puerto Rico. Como si fuera poco, también ha salido a flote el desprecio, la burla y la indolencia del gobierno de Estados Unidos, responsable principal de las carencias políticas y económicas del pueblo puertorriqueño.

Ha quedado en evidencia la ausencia de planificación y el torpe manejo del embate de un huracán intenso, como si el archipiélago borincano no estuviera en el Caribe, precisamente en la ruta de tormentas y huracanes. Claramente, ni el gobierno ni las agencias federales disponían de planes para responder a los distintos escenarios:

- 1) No se contemplaron las medidas de contingencia frente al colapso de los suministros de combustibles, agua, alimentos y materiales de primera necesidad;
- 2) Tampoco se previó el colapso de las telecomunicaciones y sus graves consecuencias en la atención y coordinación de las respuestas;
- 3) Y en el mayor acto de negligencia, nada se planificó ante el desplome de la infraestructura de energía eléctrica que se sabía, mucho antes del paso de María, de su estado de abandono y su manifiesta vulnerabilidad a cualquier ciclón no importa su intensidad.

A casi un mes, la incertidumbre lejos de amainar, crece. La información sobre el estado del País y de la recuperación de los servicios básicos, es confusa y contradictoria. El riesgo y la amenaza de enfermedades causadas por la inoperancia de los sistemas de tratamiento a las aguas usadas y potable, es real y creciente. A lo que se suma la fragilidad con la que están funcionando los pocos hospitales en servicio.

Mientras, una mejora en el manejo de la emergencia por parte de las autoridades gubernamentales queda lejos, muy lejos. Del presidente de Estados Unidos solo se han escuchado ataques y expresiones racistas, ofensivas y execrables. La moratoria a las leyes de cabotaje ¡solo duró diez días! Como burdo esperpento, Donald Trump vocifera sin disimulo lo que piensa sobre Puerto Rico la clase política dominante yanqui. Pero resulta igualmente lastimosa la respuesta sumisa de las claques políticas colonizadas de los dos partidos alcahuetes de la sumisión colonial. Para estos, la humillación no tiene límites y la abrazan como si fuera una virtud.

La situación de indefensión colonial quedó dramatizada en las declaraciones del gobernador Ricardo Rosselló cuando dijo, cándidamente: “No hay Plan B”. Solo en una colonia, con un ejecutivo abyectamente colonizado, puede pronunciarse tal expresión. Solo a un país, sometido por otro al dominio colonial, se le impide que llegue la ayuda de organismos internacionales y de otros países, como si nada significara el dolor, el hambre, el sufrimiento y la preservación de la vida de cientos de miles de familias puertorriqueñas.

Si antes de María, la crisis económica y fiscal había confirmado el fracaso estructural y las propias bases de un régimen colonial clásico, ahora, el manejo y la respuesta de la devastación causada por el huracán, demuestra su absoluta inoperancia y el riesgo que supone a la vida de toda una nación carecer de la soberanía y los poderes políticos inalienables a los que todo pueblo tiene derecho.

Salir de la situación agobiante actual recaerá principalmente en la capacidad y voluntad indomable de todos los que constituimos orgullosamente el pueblo puertorriqueño, tanto de los que viven aquí como de los que se encuentran en otras latitudes. Sí, porque la nación Boricua trasciende nuestra geografía isleña. Así ha sido desde el primer día. Han sido nuestras manos las que han abierto caminos, las que han llevado agua y comida a los lugares inaccesibles, mucho antes que las agencias gubernamentales. La ayuda de la parte de nuestro pueblo que vive en Estados Unidos ha sido constante y no ha dejado de llegar. La necesitamos y es necesario fortalecerla.

Igualmente, apreciamos el apoyo y la generosidad de los sectores solidarios del pueblo estadounidense y de sus organizaciones sociales. Y valoramos la disposición inmediata de apoyo y ayuda de los gobiernos de Cuba y Venezuela.

La agenda por delante es ambiciosa pero inescapable. Es el momento para corregir lo que se ha hecho mal y fortalecer los aciertos, lo que bien se ha hecho. No partimos de cero. Existe un enorme caudal de conocimiento, destrezas e inteligencia en nuestra gente. Tenemos una clase trabajadora diestra y comprometida. En nuestras comunidades existen experiencias y relaciones de solidaridad, muchas bien organizadas, que representan una infraestructura social medular en los esfuerzos de resistencia a las adversidades. Nuestras universidades cuentan con miles de jóvenes y académicos preparados para dar respuestas a los más intrincados retos. ¡Nuestra riqueza humana es enorme!

Se impone construir un País cuyas políticas de planificación le permitan adaptarse para enfrentar los desafíos que la naturaleza seguirá presentando, con atención especial al cambio climático. Para eso es imperativo contar con instituciones públicas fuertes, que respondan a los más genuinos intereses de nuestro pueblo, con poderes para implantar las políticas públicas y no sujetas a las limitaciones y a los poderes imperiales de otro país.

Finalmente, y no menos importante, tenemos que exigir la disolución inmediata de la Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso de Estados Unidos y la derogación de la ley “promesa” que la creó, cuyo propósito principal ha sido esquilmar los fondos del pueblo de Puerto Rico para pagarle a los bonistas. Si antes de María la deuda era impagable, insistir ahora en su pago es inmoral y constituye un crimen de lesa humanidad.

¡Otro Puerto Rico es necesario y posible! ¡Puerto Rico vencerá!

(Fuente: Resumen Latinoamericano)

VENEZUELA

En unas elecciones regionales limpias, avaladas por los más de cincuenta observadores internacionales, celebradas el 15 de octubre, El PSUV, el Partido de Nicolás Maduro, ha obtenido 17 de los 23 gobernadores. Acción Democrática, el partido socialista venezolano ha obtenido cuatro gobernadores, Primero justicia de Capriles ha obtenido uno, Voluntad Popular, el Partido de Leopoldo López, María Corina y la Tintori, que fueron recibidos en España como líderes de la oposición, no consiguen ninguno.

Publicamos varios artículos sobre este hecho.

INFORME ELECCIONES REGIONALES VENEZUELA 2017

María Florencia Pagliarone. celag.org

Este domingo Venezuela concurrió a las urnas para elegir gobernadores en 23 estados del país. Inicialmente, la elección estaba prevista para el 10 de diciembre de 2016, pero fueron pospuestas por el Consejo Nacional Electoral. Un dato que desestima las opiniones de aquellos que califican a Venezuela como “dictadura” es que la elección de gobernadores es la número 22 en 18 años de gobierno bolivariano, reafirmando el compromiso democrático con los ciudadanos.

De los 23 estados, 20 pertenecían al oficialismo y 3 a la oposición. En la elección compiten 226 candidatos pertenecientes a 76 organizaciones políticas. El padrón electoral cuenta con 18.094.065 votantes para lo cual se habilitaron 13.559 centros de votación con 30.274 mesas electorales.

Para garantizar la transparencia del proceso, 50 expertos electorales se dieron cita en Venezuela para acompañar los comicios. Forman parte tanto el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), como académicos, activistas sociales, políticos, parlamentarios y periodistas, integrantes de movimientos sociales y de defensa de los derechos humanos, de Estados Unidos y de países de América Latina y Europa[1].

Aunque la elección es regional, los resultados pueden configurar un nuevo escenario de gobernabilidad. El presidente Maduro ha anunciado que todos los gobernadores que resulten electos deberán subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente o de lo contrario no podrán asumir el cargo. Frente a ello, el jefe de campaña de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) desestimó que los gobernadores de la oposición estén dispuestos a realizar dicho juramento.

De acuerdo a los datos electorales de los comicios de este domingo, el PSUV obtuvo la victoria en 17 de las 23 gobernaciones que estaban en juego, lo que representa el 75%. La MUD lo hizo en 5 estados y aún falta por definirse el estado Bolívar

Se registró además un incremento en la participación electoral de 7,2 % respecto al proceso del 2012 situándose en el 61, 14 %

Miranda es el segundo estado en número de electores con más de dos millones. La importancia de Miranda radica en haber sido un bastión de la oposición. En las elecciones para gobernador de 2008, Capriles venció a Diosdado Cabello, cargo por el que fue nuevamente reelecto en 2012. Actualmente, sobre Capriles pesa una inhabilitación por 15 años por estar involucrado en hechos de corrupción durante su gestión como gobernador durante los años 2011, 2012 y el primer trimestre de 2013.

En las elecciones del domingo el candidato del chavismo, Héctor Rodríguez, logró imponerse frente al candidato de la MUD, Carlos Ocariz, con el 52,54 % de los votos frente al 45,92 %. Rodríguez es abogado y los comienzos de su vida política fueron como dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela. Fue miembro fundador de Juventud del PSUV, ministro de Educación y ministro de Deporte y Juventud.

Le sigue Carabobo en tercer lugar con 1,5 millones donde también se impuso el oficialismo con el 51,96 %. El cuarto estado con más electores es Lara. Allí, Carmen Meléndez le ganó a Henry Falcón, quien competía por la reelección. Falcón cuenta con un pasado chavista. Fue alcalde del municipio Iribarren por dos períodos y gobernador de Lara también por dos períodos. Meléndez es Almirante en Jefe. Fue viceministra de Educación para la Defensa, vicepresidenta de Política y Soberanía, ministra del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz y ministra del Poder Popular para la Defensa.

La oposición ganó en 5 estados, tres de los cuales -Mérida, Zulia y Táchira- constituyen zonas fronterizas con Colombia. En el caso de esta última, el candidato del PSUV obtuvo 35,38 % frente al 63, 29 % de Laidy Gómez perteneciente a Acción Democrática. Táchira ha enfrentado problemas producto del cierre de fronteras con Colombia y la inseguridad como consecuencia de la presencia de grupos armados. En los últimos tiempos se ha convertido en un corredor fronterizo para las personas emigrantes.

Zulia es el estado con mayor número de electores. Cuenta con las mayores reservas de petróleo y gas del continente y es uno de los estados en donde resultó victoriosa la oposición: el candidato de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, se impuso con el 51,6 % de los votos frente al 47,13 % que obtuvo Francisco Arias Cárdenas.

Cabe destacar que el proceso electoral ha transcurrido sin mayores inconvenientes y no se registran actos de violencia. Sin embargo, los medios de comunicación internacionales han invisibilizado el proceso electoral. El presidente Maduro ha señalado que esto es parte de la estrategia de desprestigio contra Venezuela a la vez que alimenta las pretensiones injerencistas, sobre todo, de Estados Unidos.

[1] <http://www.nodal.am/2017/10/venezuela-controversia-reconocimiento-no-los-nuevos-gobernadores-la-constituyente-marca-la-previa-las-elecciones/>

Fuente: <http://www.celag.org/informe-elecciones-regionales-venezuela-2017/>

OBSERVADORES INTERNACIONALES CALIFICARON REGIONALES COMO UN PROCESO “EXITOSO”

Posted on 16 octubre, 2017 by Jennyre Hernandez in Carrusel, Nacionales MOSCOSO.jpg

Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), calificó los comicios regionales celebrados este domingo en Venezuela como un proceso “exitoso” en el cual “se ha respetado” la voluntad de los venezolanos.

El observador internacional dijo que el proceso se llevó a cabo sin ningún tipo de irregularidades. Añadió que la “seguridad” del voto siempre estuvo garantizada ya que pudieron “constatar” que no había manera de saber cómo estaba ejerciendo el voto el elector. “Constatamos el secreto del voto, el respeto estuvo garantizado”, dijo en rueda de prensa desde la sede del poder electoral en el centro de Caracas.

Reiteró que esta elección contó con una participación “excepcional” del 61%, “muy alta” dentro de los promedios de participación que se establecen en unos comicios de este tipo, además en un país donde el voto es voluntario.

Felicitó a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), en “especial” a su presidenta, Tibisay Lucena, quien pese a haber contado con solo diez semanas para organizar el proceso, lo hizo de manera “extraordinaria”.

En relación con el pronunciamiento de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en la que desconocieron los resultados anunciados por el CNE y solicitaron una auditoria detallada por estado, Guillermo Reyes, autoridad electoral de Colombia, opinó que los ciudadanos cuentan con los recursos para exigir legalmente que se haga un recuento de los votos y no “convocando a los venezolanos a manifestaciones” ya que sería generar el “caos”.

VERGONZOSA CENSURA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESPAÑOLES SOBRE VENEZUELA.

Antonio Movellan Rebelión

Durante meses los principales medios de comunicación (televisión, prensa y radio) han proporcionado todo tipo de informaciones, noticias y debates sobre la situación en Venezuela. La rebelión insurgente de la oposición y el proceso constituyente venezolano ha ocupado kilómetros de papel en la prensa escrita y miles de kilobytes en la prensa digital. Todos sabemos de la Asamblea nacional constituyente venezolana. Una Asamblea, que casi toda la opinión publicitada en la prensa y medios españoles, ha considerado no legítima, tramposa y que hacía equivaler a Venezuela con una dictadura. Y así los españoles y españolas hemos hablado durante meses sobre la Constitución bolivariana, hemos discutido su articulado y nos volvimos juristas avezados en el sistema político venezolano. El asunto de Venezuela consumió más espacio que cualquier otro asunto nacional y era objeto de debates en el propio Congreso y en el Senado. Venezuela se había convertido, el terreno simbólico informativo, en una especie de Comunidad Autónoma española al otro lado del charco. De ahí que Maduro declarara en una ocasión, con bastante buen humor, que estaba dudando de presentarte para presidente en España. Ahora Cataluña ha sustituido a Venezuela. Y Puigdemont ha sustituido a Maduro.

Que en Venezuela existe una profunda crisis política eso es indudable como lo demuestran las 123 muertes que ha habido en protestas de calle entre abril y junio pero también es indudable que toda la información y noticias sobre Venezuela están cocinadas y manipuladas de acuerdo a la ideología preconcebida de tal periódico o de tal televisión. Es una información unidireccional. En verdad no es información: es propaganda que, al final, tiene el efecto de censurar la información.

Este domingo más de 18 millones de venezolanos estaban llamados a las elecciones para designar, por cuatro años, a los gobernadores de los 23 estados. La presidenta el Consejo Nacional Electoral (órgano independiente que controla las elecciones) anunció el lunes día 16 que la participación fue del 61,14% y que el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido gubernamental, habría ganado en 17 de los 23 Estados. Ha sido toda una sorpresa ya que se esperaba que la oposición hubiera obtenido mejores resultados electorales (los candidatos y candidatas gubernamentales han sacado, en votos, el 55% mientras que todo el resto de candidatos y candidatas han sacado el 45%). Además ha habido menos abstención que en las últimas elecciones a gobernadores del año 2012. La oposición de derechas (¡por cierto también hay una oposición de izquierdas!) ha insinuado que ha habido fraude pero tampoco se ha atrevido a decirlo en voz alta ya que sería muy difícil demostrar tal cosa y por eso la prensa internacional apenas se ha hecho eco de esas denuncias. Tampoco Trump ni Luis Almagro, de la OEA, han hecho ninguna declaración pública. En verdad nadie, en un proceso electoral tan observado y con tantas garantías, se atreve a denunciar fraude.

¿Y cómo han cubierto la prensa española y los medios de comunicación españoles?: pues ha pasado de puntillas sobre estas elecciones y solamente se ha hecho eco, en espacios secundarios, de esas denuncias balbuceantes de fraude electoral. Pero no hay columnas de opinión, ni debates ni informaciones especiales. Es muy difícil explicar cómo el partido gubernamental ha salido reforzado y con bastante apoyo social.

En verdad, lo que se hace es que unos resultados de éxito para el gobierno venezolano, son arrinconados en la información, precisamente para censurarlos porque esa información no está acorde con las toneladas de propaganda que, durante meses, se ha volcado sobre la paciente opinión pública española.

En mi opinión, Venezuela vive una crisis política de fondo y sospecho que en un futuro próximo el sistema político sufrirá transformaciones si es que quiere avanzar hacia otro modelo productivo que vaya más allá del modelo rentista petrolero tradicional –algo que la denominada revolución bolivariana no ha podido transformar-; también soy de la opinión que el sistema político venezolano (y no solo en el gobierno central) ha adquirido muchos vicios tradicionales y ha fomentado las castas burocráticas parasitarias pero el debate hoy es otro, el debate de hoy apunta a nosotros mismos, a nuestros medios de comunicación social que en vez de informar hacen propaganda o censuran informaciones.

La lucha contra la censura y por una información veraz es esencial para una sociedad democrática. En el mundo contemporáneo la censura es algo sofisticado y es mucho más poderosa que lo ha sido nunca, pese a los miles de afirmaciones en favor de la libertad de expresión contenidas en las declaraciones de derechos humanos y en las Constituciones. La censura de hoy no es la censura decimonónica del funcionario en manguitos que tachaba en negro las galeradas de los periódicos. Esa censura, que todavía persiste en algunos países, ha desaparecido en la mayor parte del mundo desarrollado. En la actualidad la censura se ejerce de mil maneras, es una censura que tiene su origen en el control de los medios de comunicación de masas por unas pocas empresas, en el abuso de los derechos de autor, en la uniformidad y eliminación de la reflexión personal y el pensamiento crítico y también en el silencio. La mejor censura es no informar de lo que puede desestabilizar el statu quo. Hoy la censura tiene un ámbito internacional y en tiempo de guerras se

convierte, la información, en un campo de batalla. La información que se da sobre Venezuela en España es un ejemplo de esta censura contemporánea. De lo que se trata es hacer triunfar la propaganda sobre la información.

COMUNICADO OFICIAL REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente los intentos del Gobierno de los Estados Unidos de América de desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano, ejercida a través del voto el pasado 15/10/2017, en estricto apego a su Constitución y ordenamiento jurídico. El pueblo venezolano participó de manera soberana, pacífica y por abrumadora mayoría en dichos comicios para elegir, mediante el voto universal, directo y secreto, a los Gobernadores de los 23 Estados del país.

Los pronunciamientos del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América no sorprenden ni al pueblo ni al gobierno venezolano pues, como ha sido el caso durante los últimos años, los resultados de las elecciones venezolanas y la voluntad de su pueblo son desconocidos por la administración estadounidense de turno, inmediatamente después de que los mismos son anunciados por el órgano rector venezolano en materia electoral. Este tipo de declaraciones sólo sirven para alentar y respaldar los llamamientos al caos, la inestabilidad, la violencia y el extremismo que promueve un sector minoritario de la sociedad venezolana que históricamente ha contado con el apoyo y financiamiento del gobierno estadounidense.

En este sentido, denunciamos una vez más ante la comunidad internacional la sistemática campaña de agresiones, amenazas e injerencia por parte de la administración estadounidense contra la Patria de Bolívar, en clara violación de las normas y principios que deben regir las relaciones pacíficas entre los Estados, en esta ocasión contra su sistema electoral, pese a que el mismo ha sido reconocido como uno de los más confiables a nivel internacional, al quedar constancia física del acto de votación electrónica y de gozar de varias fases de auditoría que garantizan tanto la transparencia del acto como la pulcritud del sistema.

Los exitosos comicios celebrados el pasado 15/10/2017, que contaron además con la acostumbrada presencia de reconocidos acompañantes nacionales e internacionales que han dado fe del proceso, son una muestra irrefutable de la voluntad y determinación del pueblo venezolano de dirimir sus diferencias por la vía democrática y a través del diálogo político, así como de su vocación pacifista y de su inquebrantable deseo por consolidar la estabilidad social del país.

La República Bolivariana de Venezuela, al reafirmar su carácter independiente y soberano, condena enérgicamente las amenazas del Gobierno del Presidente Donald Trump de imponer su poderío económico y diplomático sobre el pueblo venezolano por decidir ser dueño de su destino, sin injerencia de ningún tipo, en el marco de su vibrante modelo de democracia participativa y protagónica.

Caracas, 16 de octubre de 2017

<http://mppre.gob.ve/?p=15002>